



SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL

Radicado: 05001-31-05-016-2017-00242-01 (O2-22-152)

Accionante: WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ

Accionada: COLPESIONES E.I.C.E. Y AFP COLFONDOS S.A.

Interviniente: MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

Procedencia: JUZGADO DIECISÉIS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN

Providencia: SENTENCIA No. 0010

Asunto: PENSIÓN DE INVALIDEZ – INTERESES MORATORIOS

En Medellín, a los dieciséis (16) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), la **Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES, SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-016-2017-00242-01 (O2-22-152), instaurado por WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ en contra de COLPESIONES E.I.C.E. Y AFP COLFONDOS S.A., y donde figura como llamada en garantía la sociedad MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., con el fin de resolver el Recurso de Apelación impetrado por la parte demandante y las accionadas AFP COLFONDOS SA y COLPENSIONES E.I.C.E., así como el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de la entidad pública accionada, respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 05 de mayo de 2022 por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

El señor WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ actuando a través de apoderado judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES E.I.C.E. y la AFP COLFONDOS S.A., en procura de obtener el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez a partir del 11 de octubre de 2013, junto con los intereses moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, la indexación y las costas.

En respaldo de sus aspiraciones señala que nació el 08 de mayo de 1963 y cotizó durante toda su vida laboral un total de 1.245,71 semanas; que presentó una pérdida de capacidad laboral igual al 50,65%, estableciéndose el 11 de octubre de 2013 como fecha de estructuración del estado de invalidez. Prosigue indicando que, el 16 de junio de 2015 solicitó ante COLPENSIONES E.I.C.E. el reconocimiento de la prestación pensional por invalidez, petición que fue negada con Resolución GNR 17428 del 21 de enero de 2016, bajo el supuesto de que *“...[q]ue para la fecha en que se estructuró la invalidez (EL 11 DE OCTUBRE DE 2013), se encontraba afiliada al fondo de Pensiones CITI COLFONDOS, razón por la cual la entidad encargada de tramitar y decidir la prestación económica del asegurado (sic), es el Régimen de Ahorro Individual administrado por los fondos privados de pensiones, que en este caso corresponde a CITI COLFONDOS”*, con lo que considera agotado el requisito de la reclamación administrativa.

Aclara que, si bien no cumple con los requisitos contenidos en el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, en lo atinente a haber cotizado 50 semanas durante los 3 años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, sí acreditó haber alcanzado más del 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, por lo que debería solo exigírsele contar con 25 semanas dentro de los 3 años anteriores a su estado de invalidez; agregando para finalizar, que estuvo vinculado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad – RAIS; no obstante, de encontrarse válidamente en la actualidad como afiliado al Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPMPD, administrado por COLPENSIONES E.I.C.E.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 25 de abril de 2017 (pág.42 a 43, doc.03, carp.01), y se notificó a las demandadas AFP COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., el 05 de junio del 2017 y el 06 de diciembre de ese mismo año, respectivamente (págs.44 y 150, doc.03, carp.01), dándose aviso de la existencia del presente proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 22 de noviembre de 2017 (págs.145 y 146, doc.03, carp.01).

COLPENSIONES E.I.C.E., al momento de dar respuesta al escrito incoativo aceptó como ciertos los hechos que hacen referencia a la fecha de nacimiento del accionante, el porcentaje de PCL otorgado, la reclamación pensional que fuera presentada y la respuesta brindada a la misma; a los demás hechos respondió que no le constaban. Es así que se opuso a la prosperidad de las pretensiones, proponiendo en su defensa las excepciones de mérito que postuló como prescripción, inexistencia de la obligación de pagar pensión de invalidez, inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, imposibilidad de condena en costas, buena fe de Colpensiones y la innominada (págs.151 a 164, doc.03, carp.01).

La AFP COLFONDOS S.A. también planteó oposición a las reclamaciones impetradas en su contra. Frente a los hechos en los que estas se fundan, adujo como cierto el que hace referencia a la afiliación del accionante al RAIS a partir del 12 de marzo de 1997 y hasta el 12 de noviembre de 2013, data en la cual se solicitó el traslado al RPMPD, que fuera finalmente aprobado al mes siguiente; sobre los restantes supuestos fácticos manifestó, que no le constan. Presentó como excepciones de mérito las que denominó como inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión de invalidez solicitada, falta de causa para demandar, prescripción, compensación, buena fe la entidad, inexistencia del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley para ser beneficiaria de una pensión de invalidez e inexistencia de dictamen pericial que califique al demandante como inválido (págs.45 a 71, doc.03, carp.01).

De igual forma, llamó en garantía a Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. (págs.72 a 131, doc.03, carp.01)., llamamiento que fue admitido por el juzgado de conocimiento (págs.175 a 176, doc.03, carp.01).

La mencionada aseguradora, al dar respuesta coadyuvó la oposición dada por la administradora de fondos de pensiones y cesantías accionada, proponiendo las excepciones de mérito de falta de legitimación en la causa por activa y pasiva, ausencia de elementos exigidos para la pensión solicitada al accionado, prescripción, improcedencia de intereses moratorios, pago y/o compensación, cláusulas que rigen el contrato de seguro y ausencia de requisitos para afectar la póliza (págs.217 a 242, doc. 03, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 05 de mayo de 2022 (docs.18 y 19, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, en la que resolvió condenar a la enjuiciada COLPENSIONES E.I.C.E. al

reconocimiento y pago indexado de la pensión de invalidez a partir del 11 de octubre de 2013 y en cuantía inicial igual a un salario mínimo legal mensual vigente, fijando como retroactivo pensional al 31 de mayo de 2022, la suma de \$86.262.854,00. Así mismo, declaró probados los hechos sustento de las excepciones formuladas de inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, inexistencia de la obligación y falta de causa para pedir, y ausencia de requisitos para afectar la póliza, absolviendo así a la AFP COLFONDOS S.A. y a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.

En igual sentido, gravó en costas a COLPENSIONES E.I.C.E. y a la AFP COLFONDOS S.A., en favor del promotor y de la sociedad aseguradora llamada en garantía, respectivamente.

Para sustentar su decisión, el cognoscente de primer grado luego de sostener que el demandante demostró el estado de invalidez, resolvió, con arreglo a lo señalado en el parágrafo 2 del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 1° de la Ley 860 de 2003, acceder a las pretensiones formuladas, al encontrar probado que el afiliado cotizó más del 75% de las semanas exigidas para causar una pensión de vejez y contar con 25 semanas durante los tres años anteriores a la estructuración de la invalidez.

De igual forma, resolvió que la entidad de seguridad social llamada a reconocer la prestación pensional del señor WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ corresponde a COLPENSIONES E.I.C.E., pues a pesar de que para la fecha de estructuración del estado de invalidez del primero, se encontraba vinculado en el RAIS a través de la AFP COLFONDOS S.A., el dictamen de pérdida de capacidad laboral fue expedido cuando ya había surtido efectos el traslado de régimen pensional, estando el actor válidamente afiliado al RPMPD y acudiendo para el efecto a lo establecido en el artículo 42 del Decreto 1406 de 1996 y en varios apartados de la sentencia SL5183 de 2021 proferida por el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y seguridad social.

Seguidamente, sostuvo que la decisión de desestimar la solicitud de reconocimiento pensional del accionante por parte de COLPENSIONES E.I.C.E. estuvo ajustada a derecho, y por ende, no hay lugar a imponer condena a título de intereses moratorios; citando lo resuelto por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en proveído SL5576 de 2021; no sin antes reconocer la indexación del retroactivo pensional en aras de morigerar los efectos negativos de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.

Ulteriormente y por las resultas del llamamiento en garantía impulsado por la AFP COLFONDOS S.A., dispuso su condena en costas a favor de la aseguradora Mapfre Colombia Vida Seguros S.A. (minuto 33:15 a 52:43, doc.18, carp.01).

1.3. Recurso de Apelación

El procurador judicial del señor WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ, inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación, a fin de que se revoque de manera parcial la decisión adoptada en la primera instancia, para en su lugar, se reconozcan los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Con tal propósito expuso que la administradora del régimen de prima media incurrió en mora para el reconocimiento pensional, no siendo de recibo el argumento de la existencia de un conflicto frente a la responsabilidad de esta administradora en el pago de la prestación (minuto 52:51 a 54:36, doc.18, carp.01).

La apoderada judicial de la AFP COLFONDOS S.A. impugna la condena impuesta en costas en contra de su representada y en favor de la Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., en tanto en cuanto, esta administradora no fue condenada a reconocer ninguna prestación de las solicitadas en la demanda. Situación distinta es acudir a la figura del llamamiento en garantía, para que respondiera por la suma adicional que se requiera para el financiamiento de la pensión. De esta manera, por no surgir condena en contra de esta administradora, no hay lugar a gravarla en costas (minuto 54:45 a 57:41, doc.18, carp.01).

COLPENSIONES E.I.C.E. explica que el artículo 14 del Decreto 692 de 1994, es claro en establecer que le corresponde a la administradora de fondo de pensiones a la que se encuentre afiliado el demandante al momento del siniestro, la que le corresponde asumir el reconocimiento de la prestación pensional que corresponda; citando la sentencia SU-313 de 2020 emitida por la Corte Constitucional, los Decretos 780 y 1833 de 2016, así como la sentencia de noviembre de 2020 proferida por esta Corporación en el proceso 05001-31-05-015-2015-00450-00, que acogió los planteamientos sustento de la impugnación.

1.4. Grado Jurisdiccional de Consulta

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses COLPENSIONES E.I.C.E., la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta, en favor de la antedicha entidad, en los puntos en los que no fue objeto de alzada.

1.5. Trámite de Segunda Instancia

Los recursos de apelación y el grado jurisdiccional de consulta se admitieron el 16 de mayo de 2022 (doc.02, carp.02), y mediante proveído del día 23 del mismo mes y año (doc.03, carp.02) se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el artículo 15 el

Decreto Legislativo 806 de 2020 –vigente para la época-, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de considerarlo del caso.

La vocera judicial de COLPENSIONES E.I.C.E. (doc.04, carp.02), presentó las alegaciones pertinentes solicitando se revoque la decisión proferida por el *a quo* y en su lugar se declare probada la excepción de mérito de inexistencia de obligación por parte de Colpensiones a reconocer y pagar pensión de invalidez al demandante, por cuanto a la fecha de estructuración del estado de invalidez, el demandante se encontraba afiliado en la AFP COLFONDOS S.A.

Con tal propósito, destaca que la sentencia recurrida para solucionar la controversia no aplicó los lineamientos contenidos en el artículo 14 del Decreto 692 de 1994 y en el Decreto 780 de 2016, afirmando que se desconoció también lo delineado por la Corte Constitucional en sentencia SU-313 de 2020 y T-672 de 2016, así como la que fuera proferida por esta Corporación el 06 de noviembre de 2020 dentro del proceso identificado con radicado único nacional 05001-31-05-015-2015-00450-00. Desarrollando los yerros que le atribuye a la sentencia cuestionada, insiste que la obligación de reconocer la prestación pensional a los afiliados en casos como el del demandante, corresponde a la administradora de fondos de pensiones a la cual se encontraba vinculado al momento en que se presentara la contingencia, esto es, la AFP COLFONDOS S.A.

Por su parte, la parte actora luego de solicitar se confirme la sentencia proferida por el juez de conocimiento en lo que al derecho a la pensión de invalidez respecta, disiente de la absolución por los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 que fuera dispensada en primera instancia. De esta manera, funda la censura en la negativa injustificada de COLPENSIONES E.I.C.E. en el reconocimiento de la prestación pensional solicitada, retardando con ello el disfrute del derecho que le asiste al accionante, y con ello, dando lugar al acogimiento de este pedimento.

El profesional del derecho que asiste a la sociedad Mapfre Colombia Vida Seguros S.A., presentó alegatos como interviniente no recurrente, en los cuales invita a que se confirme la decisión confutada y se mantenga con ello indemne a su representada, al considerar que no se cumplen los presupuestos legales necesarios para endilgar responsabilidad con arreglo a las pólizas traídas a juicio. Por su parte, guardó silencio la demandada AFP COLFONDOS S.A.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por el señor WILLIAM

EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ, COLPENSIONES E.I.C.E., y la AFP COLFONDOS S.A., advirtiéndose que, de conformidad con el principio de consonancia consagrado en el artículo 66A del CPTSS, el estudio de la sentencia impugnada se limitará a los puntos de inconformidad materia de alzada, al igual que se examinará en el grado jurisdiccional de consulta a favor de COLPENSIONES E.I.C.E., en los puntos en los que no fue objeto de apelación.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si al señor WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez a partir del 11 de octubre de 2013, efecto para el que será necesario establecer cuáles son los requisitos que el afiliado debe acreditar para la causación y disfrute de la referida prestación, con arreglo a los preceptos normativos y criterios jurisprudenciales que rigen la materia. Asimismo, la Sala se ocupará en determinar la entidad de seguridad social obligada a reconocer la pensión por invalidez y si en el asunto puesto a la palestra procede el reconocimiento de los intereses de mora, para en caso afirmativo, fijar la fecha desde la que se causaron los mismos. Dilucidado lo anterior, se resolverá lo pertinente frente a la condena en costas a cargo de la AFP COLFONDOS S.A. y a favor de Mapfre Colombia Vida Seguros S.A.

2.2. Sentido del Fallo

La Sala revocará parcialmente la decisión de primer grado, para aplicar los postulados establecidos en el precedente constitucional contenido en la sentencia SU-313 de 2020 proferida por la Corte Constitucional, y concluir que la fecha de estructuración del estado de invalidez será el elemento determinante para dirimir el caso que se analiza de definición del reconocimiento del derecho pensional pretense entre administradoras del RAIS y del RPMPD, conforme a la modalidad y subreglas que se explicarán en esta decisión.

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de

los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ nació el 08 de mayo de 1963 (pág.34, doc.03, carp.01), que durante toda su vida laboral cotizó un total de 1.245,71 semanas (págs.19 a 28 y 66 a 71, doc.03, carp.01); y que estuvo afiliado al RAIS a través por la AFP COLFONDOS S.A. entre el 1° de mayo de 1997 y el 12 de diciembre de 2013, estando a partir de esta calenda válidamente afiliado al RPMPD administrado por COLPENSIONES E.I.C.E. (págs.18 y 61 a 65, doc.03, carp.01).

Adicionalmente, no se cuestionó que el demandante fue calificado por COLPENSIONES E.I.C.E., a través del dictamen de calificación de pérdida de capacidad laboral el 25 de mayo de 2015, determinando un 50,65% como PCL, estructurada el 11 de octubre de 2013, por causas de origen común (págs.29 a 33, doc.03, carp.01), y que con base en aquella calificación solicitó el reconocimiento de la pensión de invalidez, prestación que le fue denegada por COLPENSIONES E.I.C.E., mediante la Resolución GNR17428 del 21 de enero de 2016 (págs.13 a 17, doc.03, carp.01).

2.3.1 De la Pensión de Invalidez

El Sistema Integral de Seguridad Social fue concebido como *“el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, a disposición de las personas y la comunidad entera para garantizar un nivel de calidad de vida digna, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar cobertura integral a todas las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad”* (Ley 100 de 1993, preámbulo).

El Sistema General de Pensiones, fue a su vez diseñado para garantizar a la población colombiana el amparo ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, reconociendo para ello una prestación económica denominada pensión, otorgada por la entidad administradora del régimen al que se hubiere vinculado el afiliado, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen que resulte aplicable a cada afiliado (artículo 1º de la Ley 100 de 1993).

Ahora, en lo que concretamente concierne al fin último de la prestación económica que se deriva del riesgo de invalidez con ocasión a la materialización de una contingencia de origen común ora de origen laboral, la Sala de Casación Laboral Corte Suprema de Justicia ha puntualizado en sentencias SL3275 de 2019 y SL3873 de 2022 que, aquella está *“destinada a cubrir las contingencias generadas por la enfermedad o el accidente que inhabilitan al afiliado para el ejercicio de la actividad laboral. En ese sentido, su fin es garantizar a la persona que ve disminuida su capacidad para trabajar, un ingreso que le permita asegurar todas sus necesidades básicas, así como el de las personas que se encuentran a su cargo”*; previo, claro está, al cumplimiento de los requisitos legales establecidos para su causación y disfrute.

En ese orden, es de precisar que el legislador no previó un régimen de transición en la prestación pensional por invalidez, como si lo estableció para la de vejez en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993; sin perjuicio claro está del principio constitucional de la condición más beneficiosa, el cual admite, de manera excepcional y bajo condiciones específicas, acudir a la normativa que de manera inmediatamente precedente gobernaba el reconocimiento de la prestación, como bien lo ha explicado de manera reiterada la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencias SL2358 y SL4650 de 2017.

Conforme con lo antes dicho y a manera de corolario, diáfano se exhibe qué, por regla general, las disposiciones legales de seguridad social que resultan aplicables para resolver el reconocimiento de esta prestación de invalidez corresponden a aquellas que se encuentren en vigor a la fecha de estructuración de este estado, acogiendo así las reglas de aplicación inmediata de la ley y el efecto retrospectivo propio de las normas de seguridad social.

Así, para que el juez brinde una solución a la cuestión litigiosa, es deber, *prima facie*, identificar de manera cristalina, la existencia y vigencia de la normativa que resulte aplicable a la prestación económica por invalidez y de esta forma verificar la observancia de los requisitos establecidos en ella, para determinar además de la calidad de beneficiario del afiliado, la fecha de causación y disfrute de la pensión solicitada.

Bajo estas directrices, memora la Sala que en el *sub lite* se acreditó que el señor WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ fue calificado con una PCL igual al 50,65%, fijándose como

fecha de estructuración el 11 de octubre de 2013 (págs.29 a 33, doc.03, carp.01), lo que de suyo comporta que, las reglas para determinar la existencia del derecho a la pensión de invalidez se encuentran contenidas, para el caso del RPMPD en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, este último modificado por la Ley 860 de 2003 y, para el caso del RAIS, en el artículo 69 de la misma compendio normativo, que itera idénticos requisitos al RPMPD, que contiene las reglas vigentes a la fecha de estructuración del estado de invalidez del accionante.

En aplicación de las máximas que gobiernan las aspiraciones del promotor, es menester para la prosperidad de las mismas, la demostración en juicio de las siguientes condiciones: i. padecer un estado de invalidez, o lo que es lo mismo, haber perdido el 50% o más de su capacidad laboral por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente (artículo 38, Ley 100 de 1993), y; ii. haber cotizado al menos 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración de la contingencia, a menos que, el afiliado haya cotizado por lo menos el 75% de las semanas mínimas requeridas para acceder a la pensión de vejez, supuesto en el que solo se requerirá que haya cotizado 25 semanas en el mismo lapso (artículo 39, Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003).

Bajo esos lineamientos normativos, en este caso está suficientemente traslúcida la prueba del estado de invalidez como primer presupuesto al que se hizo mención en el punto inmediatamente anterior, teniendo en cuenta la PCL de 50,65% que le fuera asignada al convocante por parte de COLPENSIONES E.I.C.E. (págs.29 a 33, doc.03, carp.01) y que, a todo esto, no fue discutida. No ocurre lo mismo, en lo atinente a la densidad de semanas de cotización, pues a pesar que no se desconoce que el señor WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ aportó durante toda su vida laboral un total de 1.245,71 semanas, de éstas, solo 36,43 fueron cotizadas durante los tres años anteriores a la invalidez, esto es, el lapso comprendido entre el 11 de octubre de 2010 y el 11 de octubre de 2013, por lo que en principio las pretensiones del accionante no estarían llamadas a prosperar.

Sin embargo, tal conclusión es apenas aparente y no resiste el mayor análisis bajo la égida del párrafo segundo del artículo 39 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 860 de 2003, el cual plantea una alternativa para superar el requisito de densidad mínima de 50 semanas cotizadas dentro de los 3 años anteriores a la estructuración de la contingencia, para así permitir que el afiliado en estado de invalidez acceda a la prestación con solo 25 semanas cotizadas en ese mismo lapso, si y solo sí, demuestre haber aportado al menos el 75% de las semanas requeridas para acceder a la pensión de vejez al momento en que el afiliado perdió su capacidad de trabajo.

En el *sub studium*, constituye un hecho irrefutable que el actor a febrero de 2013 contaba con un total de 1.245,71 semanas cotizadas, que equivalen al 99,65% de las 1.250 semanas exigidas en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, para el régimen de prima media con prestación definida para acceder a la pensión de vejez en el año 2013, fecha de estructuración de la invalidez.

Es por ello que sin hesitación alguna, se muestra acertado, como lo coligió el *a quo*, acudir a la anterior regla para definir el derecho pensional del pretensor y no al principio de la condición más beneficiosa, adicional a que también no fue objetado el hecho de que el accionante dentro de los tres años anteriores al estado de invalidez cotizó 36,43 semanas, cumpliendo con suficiencia los lineamientos para ser destinatario de la pensión de invalidez, no mereciendo así reparo alguno la decisión revisada en derredor al cumplimiento de los presupuestos necesarios para la causación y disfrute del derecho pensional en discusión.

2.3.2 De la Administradora Responsable del Reconocimiento Pensional

En el fallo recurrido, el sentenciador de instancia concluyó que la prestación pensional debía ser asumida en su integridad por COLPENSIONES E.I.C.E., administradora a la cual el promotor de la Litis se encontraba válidamente afiliado, en la fecha en que se emitió el dictamen de PCL que determinó el estado de invalidez del demandante, haciendo propios los razonamientos a los que acudió la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia SL5183 de 2021, y dejando de lado la aplicación de la sentencia SU-313 de 2020, proferida por la Corte Constitucional.

En línea con lo anterior, la Sala no soslaya que existen enfoques fundamentalmente opuestos para determinar la administradora del SGSSP responsable de asumir el pago de la prestación de invalidez, en el escenario en que entre la fecha de estructuración de la contingencia y la data en que fue expedido el dictamen de PCL, el beneficiario transitó entre administradoras adscritas al RPMPD y al RAIS.

Para la Corte Constitucional, según los lineamientos que traza en la sentencia SU-313 de 2020, el pago de la prestación pensional en estos casos, incumbe a la administradora de pensiones a la cual se encuentre válidamente afiliado el destinatario a la fecha de estructuración del estado de invalidez. A contrario sensu, para la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la entidad de seguridad social que debe asumir el pago de la prestación de invalidez, es aquella a la que se encuentre afiliado al momento que se conoce la determinación de la PCL, tal y como se comprende del examen de los argumentos plasmados en sentencias SL5183 de 2021, y SL1397 y SL4295, ambas de 2022.

Ante esta disyuntiva, dada la complejidad que comporta las posturas abiertamente incompatibles entre una y otra Alta Corporación, esta Sala de Decisión, en ejercicio del principio de la autonomía que caracteriza la función judicial (artículos 228 y 230 de la CP), acogerá el criterio y la regla de interpretación defendida por la Corte Constitucional¹ (artículo 241 de la CP), para sostener, como remedio judicial, que en casos como el que ocupa la atención de la Sala, ***[I]a fecha de estructuración será el elemento que resuelva cualquier conflicto de competencias que se suscite entre administradoras del RAIS y del RPM;*** acudiendo en síntesis a los argumentos puntuales relativos a que: 1) *del artículo 3.2.1.12 del Decreto 780 de 2016 se desprende que, aun cuando exista un traslado, el fondo antiguo mantiene la competencia por el reconocimiento de prestaciones que se causen en su vigencia;* 2) *porque esta regla es la que mejor armoniza con el sistema de financiación previsto por el legislador para las pensiones de invalidez;* y 3) *porque con su aplicación no se afecta el derecho a la libertad de elección de régimen pensional, ni se limita el derecho a la seguridad social* (Corte Constitucional, sentencia SU-313 de 2020). (Negritas Intencionales de la Sala).

En esta dirección y para afianzar el postulado anterior, se ha de precisar que el artículo 42 del Decreto 1406 de 1996, hoy compilado en el artículo 3.2.1.12 del Decreto 780 de 2016, dispone que *[e]l traslado entre entidades administradoras estará sujeto al cumplimiento de los requisitos sobre permanencia en los regímenes y entidades administradoras que establecen las normas que reglamentan el Sistema. En todo caso, el traslado de entidad administradora producirá efectos sólo a partir del primer día calendario del segundo mes siguiente a la fecha de presentación de la solicitud del traslado efectuada por el afiliado ante la nueva entidad administradora. La entidad administradora de la cual se retira el trabajador tendrá a su cargo la prestación de los servicios y el reconocimiento de prestaciones hasta el día anterior a aquél en que surjan las obligaciones para la nueva entidad.*

En el Sistema de Seguridad Social en Salud, el primer pago de cotizaciones que se deba efectuar a partir del traslado efectivo de un afiliado, se deberá realizar a la nueva Entidad Promotora de Salud. En el Sistema de Seguridad Social en Pensiones, el primer pago de cotizaciones que se deba efectuar a partir del traslado efectivo de un afiliado, se deberá realizar a la antigua administradora de la cual éste se trasladó, con excepción de los trabajadores independientes, que deberán aportar a la nueva administradora de pensiones. Para los efectos del presente artículo, se entenderá por traslado efectivo el momento a partir del cual el afiliado queda cubierto por la nueva entidad en los términos definidos en el inciso anterior.

¹ Corte Constitucional, sentencia SU-068 de 2018. (...) En suma, la Corte estima que las autoridades judiciales tienen el deber de seguir las decisiones proferidas por los órganos de cierre, en especial las posiciones expuestas por la Corte Constitucional. La obligatoriedad del precedente pretende garantizar los principios de igualdad, de justicia formal, de buena fe y de seguridad jurídica, así como realizar la coherencia y consistencia del sistema jurídico. El procedimiento de extensión de jurisprudencia asegura que la administración pública garantice la igualdad de trato y la vigencia del principio de legalidad, mandatos que incluyen las decisiones judiciales (...)

Ahora, el razonamiento que debe orientar la intelección de la normativa antes aludida, estriba en la identificación de la fecha, o bien el momento, a partir del cual se entiende que, surge para la administradora de fondos de pensiones la obligación de reconocer el derecho pensional producto de la materialización del riesgo de invalidez, lo que para la Sala ocurre en la data de estructuración de este estado y no en la fecha en que se conoce la determinación de la PCL, bajo el entendido que, por regla general, es a partir de esa calenda que el afiliado pierde la capacidad para continuar incorporado al mercado laboral y proveerse de manera autónoma lo necesario para garantizar su subsistencia, y es desde este hito, que se reconoce el estatus de pensionado e inicia el pago de las mesadas pertinentes, previo cumplimiento del requisito de semanas cotizadas y, sin perjuicio, claro está, del trato diferenciado por condiciones especialísimas y específicas, como lo son la capacidad ocupacional residual y las consecuencias del padecimiento de enfermedades crónicas, congénitas o degenerativas.

Razonamiento que se acompasa con lo señalado por el artículo 10² del Acuerdo 49 de 1990 y el último inciso del artículo 40³ de la Ley 100 de 1993, que vinculan aspectos tan relevantes como el disfrute y la cuantía de la prestación, no al momento en que el beneficiario solicita el reconocimiento pensional apoyado en el dictamen de PCL, sino a la fecha de materialización de la contingencia, que naturalmente es anterior a la declaración formal de la invalidez; sin que esta conclusión riña con los mecanismos de financiación de uno y otro régimen pensional, como quiera que la administradora a la que se encontraba vinculado el beneficiario en la fecha de estructuración de la contingencia, recibió los aportes correspondientes y los distribuyó de acuerdo, en lo pertinente, con lo normado en el artículo 20⁴ y el literal b⁵ del artículo 60 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003, y si ello es así, en tratándose del RAIS, ingresaron a la CAI y se contrató el seguro colectivo y de participación del artículo 108⁶ de la

² **ARTÍCULO 10. DISFRUTE DE LA PENSION DE INVALIDEZ POR RIESGO COMUN.** La pensión de invalidez por riesgo común, se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la fecha en que se estructure tal estado. Cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio. La pensión de invalidez por riesgo común, se otorgará por períodos bienales, previo examen médico - laboral del ISS, al que el beneficiario deberá someterse en forma obligatoria, con el fin de que se pueda establecer que subsisten las condiciones que determinaron su otorgamiento. La pensión de invalidez se convertirá en pensión de vejez, a partir del cumplimiento de la edad mínima fijada para adquirir este derecho.

³ **ARTÍCULO 40. MONTO DE LA PENSIÓN DE INVALIDEZ.** El monto mensual de la pensión de invalidez será equivalente a: a. El 45% del ingreso base de liquidación, más el 1.5% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras quinientas (500) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral sea igual o superior al 50% e inferior al 66%. b. El 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada cincuenta (50) semanas de cotización que el afiliado tuviese acreditadas con posterioridad a las primeras ochocientas (800) semanas de cotización, cuando la disminución en su capacidad laboral es igual o superior al 66%. La pensión por *invalidez* no podrá ser superior al 75% del ingreso base de liquidación. En ningún caso la pensión de *invalidez* podrá ser inferior al salario mínimo legal mensual. La pensión de invalidez se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse, en forma retroactiva, desde la fecha en que se produzca tal estado.

⁴ **ARTÍCULO 20. MONTO DE LAS COTIZACIONES.** La tasa de cotización continuará en el 13.5%* del ingreso base de cotización. En el régimen de prima media con prestación definida el 10.5% del ingreso base de cotización se destinará a financiar la pensión de vejez y la constitución de reservas para tal efecto. El 3% restante sobre el ingreso base de cotización se destinará a financiar los gastos de administración y la pensión de invalidez y sobrevivientes. En el régimen de ahorro individual con solidaridad el 10% del ingreso base de cotización se destinará a las cuentas individuales de ahorro pensional. Un 0.5% del ingreso base de cotización se destinará al Fondo de Garantía de Pensión Mínima del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad y el 3% restante se destinará a financiar los gastos de administración, la prima de reaseguros de Fogafin, y las primas de los seguros de invalidez y sobrevivientes. A partir del 1o. de enero del año 2004 la cotización se incrementará en un uno por ciento (1%) sobre el ingreso base de cotización. Adicionalmente, a partir del 1o. de enero del año 2005 la cotización se incrementará en medio por ciento (0.5%) y otro medio punto (0.5%) en el año 2006. A partir del 1o. de enero del año 2008, el Gobierno Nacional podrá incrementar en un (1%) punto adicional la cotización por una sola vez, siempre y cuando el crecimiento del producto interno bruto sea igual o superior al 4% en promedio durante los dos (2) años anteriores. El incremento de la cotización se destinará en el régimen de prima media al pago de pensiones y a la capitalización de reservas pensionales.

⁵ **ARTÍCULO 60. CARACTERÍSTICAS.** El Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad tendrá las siguientes características: (...) b. Una parte de los aportes mencionados en el literal anterior, se capitalizará en la cuenta individual de ahorro pensional de cada afiliado. Otra parte se destinará al pago de primas de seguros para atender las pensiones de invalidez y de sobrevivientes y la asesoría para la contratación de la renta vitalicia, financiar el Fondo de Solidaridad Pensional y cubrir el costo de administración del Régimen.

⁶ **ARTÍCULO 108. SEGUROS DE PARTICIPACIÓN.** Los seguros que contraten las administradoras para efectuar los aportes adicionales necesarios para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes deberán ser colectivos y de participación. El Gobierno Nacional determinará la forma y condiciones cómo las

Ley 100 de 1993, mientras que en el caso del RPMPD estos aportes ingresaron al fondo común de naturaleza pública para la constitución de la reserva respectiva y el pago de las mesadas pensionales de la época; con lo que se garantiza el financiamiento de la pensión de invalidez en estas especiales circunstancias, debiendo eso sí, retornar a la entidad pensionante todos los aportes que se hayan sufragado con posterioridad al estado de invalidez, en caso de haberse efectuado.

Con todo, se aclara aquí y ahora, que esta postura resuelve de manera completa el caso particular del accionante señor WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ, en cuyo caso se verificó que entre la fecha de estructuración de la invalidez – 11 de octubre de 2013- y la época en que se declaró formalmente la misma -25 de mayo de 2015-, no transcurrió un lapso de tiempo considerable, así como tampoco se presentaron cotizaciones por parte del accionante a COLPENSIONES E.I.C.E. en periodos posteriores al traslado del RAIS al RPMPD en diciembre de 2013 (págs.18 a 28, doc.01, carp.01); aspectos que han de ser valorados y sopesados para resolver y determinar en lo sucesivo, si la variación en éstos torna inaplicable, en otras controversias, el precedente al que acude hoy la Sala para resolver el asunto.

Es por ello que, al no tratarse de una solución que aplique de manera absoluta e invariable para todos los casos, la Sala considera que deberá acudirse a la regla estándar que el régimen pensional que será aplicable para el reconocimiento de una pensión de invalidez, será aquel en donde se encontraba vinculado el beneficiario o solicitante en el momento en que se estructuró la PCL, siempre que se verifiquen las siguientes condiciones: **i.** no se transgreda el derecho del ciudadano a la libre selección de régimen pensional; **ii.** no se afecte profundamente la sostenibilidad financiera del sistema, y; **iii.** no se vulnere el derecho a la seguridad social del afiliado.

En este horizonte, yergue incontrastable que, en el caso concreto la responsabilidad en el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez del accionante en la cuantía calculada por el juzgador de instancia recae en la AFP COLFONDOS S.A., al ser ésta y no otra la entidad administradora del RAIS a la cual se encontraba afiliado aquel a la fecha de estructuración del estado de invalidez el pasado 11 de octubre de 2013, lo que de suyo comporta que la vinculación del actor al RPMPD en diciembre de 2013 no está llamada a surtir efectos, al entenderse pensionado el accionante desde el 11 de octubre de ese mismo año en el RAIS, y ser los regímenes pensionales creados con el SGSSI, abiertamente excluyentes (artículo 16 de la Ley 100 de 1993). De ahí que, se ordenará a COLPENSIONES E.I.C.E. a devolver a la

sociedades administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán contratar los seguros previsionales para el pago de las pensiones de invalidez y sobrevivencia. Así mismo, las aseguradoras que asuman cualquier tipo de rentas vitalicias adoptarán para ello la modalidad de seguros de participación en beneficio de los pensionados

RAIS, representado en esta Litis por la AFP COLFONDOS S.A., las cotizaciones efectuadas por el trabajador a través de un bono pensional tipo A en la modalidad que corresponda, conforme con las directrices del Decreto 1299 de 1994 y demás normas concordantes, para el correcto financiamiento de la prestación económica (artículo 70, Ley 100 de 1993).

Concordante con lo anterior, para resolver los reproches presentados por la codemandada AFP COLFONDOS S.A. frente a la validez del dictamen de PCL emitido por COLPENSIONES E.I.C.E. (págs.58 y 59, doc.03, carp.01) que fuera adosado por el promotor como prueba documental en el escrito inaugural, por infracción del derecho al debido proceso ante la imposibilidad de objetarlo en sede administrativa y no reunir los requisitos del artículo 228 del CGP, la Sala se remite al artículo 142 del Decreto 019 de 2012, que modificó el artículo 41 de la Ley 100 de 1993, el cual reza: *[c]orresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos [Laborales] – AR[L]-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias; pudiendo acudir a las Juntas Regionales de Calificación de Invalidez y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el evento en que uno de los interesados, llámese la persona calificada o sus beneficiarios en caso de muerte, la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de Régimen de Prima Media, el Empleador o la Compañía de Seguro que asuma el riesgo de invalidez, sobrevivencia y muerte, si se presentara disenso frente a la fecha de estructuración de la contingencia, su origen o el porcentaje de la PCL asignado; por lo que en principio la razón estaría de lado de la administradora del RAIS al debatir la fuerza probatoria del dictamen arrojado por el accionante, al no haber participado del trámite descrito en líneas anteriores y consignado en el Decreto 019 de 2012.*

Sin embargo, contrario a lo expuesto por la AFP COLFONDOS S.A., dentro de esta actuación judicial la entidad sí conoció el contenido y alcance del dictamen pericial emitido por COLPENSIONES E.I.C.E., al punto que la primera de estas administradoras solicitó la práctica de un nuevo dictamen, para así apartarse no solo del porcentaje que arrojó la PCL, sino también de la fecha de estructuración del estado de invalidez del demandante (págs.58 a 60, doc.03, carp.01), lo que de suyo comporta que en efecto ejerció su derecho de defensa y contradicción frente a este medio probatorio, indistintamente haya desistido de su práctica como parte de la estrategia de su defensa (doc.09 y doc.13, carp.01), no aflorando por tanto en el devenir procesal razones o fundamentos plausibles que permitan apartarse del contenido de la calificación practicada al demandante, conservando con ello su capacidad demostrativa.

2.3.2 De los Intereses Moratorios

El artículo 141 de la Ley 100 de 1993 prevé que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales de que trata esta ley, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago, intereses que (i) tienen una naturaleza resarcitoria y no sancionatoria, en consecuencia, la actuación de buena o mala fe no es relevante para su interposición, (ii) buscan reparar un perjuicio ante la falta de pago total o parcial de la mesada pensional, y (iii) existen salvedades que exoneran de su imposición, siempre y cuando existan razones atendibles al amparo del ordenamiento jurídico vigente al caso decidido, o por aplicación de nuevas reglas jurisprudenciales (CSJ SL1019-2021).

Aquí, debe recalcar la Sala, que, tratándose de procesos como el presente, en donde no existe una disposición legal que regule de manera concreta las controversias de esta estirpe y presentándose posturas opuestas entre autoridades judiciales de cierre, que implicó una interpretación omnicomprendensiva relativa a la administradora llamada a pagar la prestación de invalidez, aunado a la ausencia de reclamación del reconocimiento pensional ante la AFP COLFONDOS S.A.; se muestra necesario absolver a esta última entidad de reconocer los intereses de mora pretendidos por el aquí accionante, pues solo con esta decisión se dilucidó la forma de resolver el conflicto planteado.

En subsidio, y habida cuenta que la suma reconocida por concepto de retroactivo pensional se verá afectada por la devaluación de la moneda, a causa de existir una economía notoriamente inflacionaria, lo procedente es ordenar la indexación de las sumas adeudadas, por tratarse de obligaciones propias del sistema de seguridad social que tienen un notorio carácter alimentario (SL- 11818 del 08-08-1999, reiterada, entre otras, en la SL-54806 del 06- 03-2013).

2.3.3 De la Responsabilidad de la Llamada en Garantía

Revisados los seguros de previsión de invalidez y sobrevivientes arrimados por las sociedades AFP COLFONDOS S.A. y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. (págs.91 a 102 y 231 a 235, doc.03, carp.01), se colige que esta última aseguró los riesgos de IVM de la administradora del RAIS desde el 1° de enero de 2009 y hasta el 01 de enero de 2014; por tanto al ocurrir el riesgo asegurado, cual es, la estructuración del estado de invalidez el 11 de octubre de 2013 en vigencia de la póliza, la cobertura del seguro previsional contratado con MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA es de carácter automática, pues al resultar condenada COLFONDOS S.A, por ministerio de la ley se le extienden los efectos a la

mencionada aseguradora como garante, la que deberá cubrir si así resultare, la suma adicional necesaria para financiar la prestación pensional, en cumplimiento de los artículos 70 y 108 de la Ley 100 de 1993.

Corolario de lo anterior, se condenará a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. a cubrir la suma adicional, si fuere menester, que agregada a la acumulada en la cuenta de ahorro individual por aportes obligatorios, más los rendimientos y bonos pensionales llegaren a existir a favor de WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ, completen el capital necesario para pagar su pensión de invalidez.

En consonancia con todo lo expuesto y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes descritas, se dispondrá por la Sala la revocatoria parcial de la sentencia de primer grado, en cuanto a la administradora del SGSSP responsable del pago del derecho pensional en disputa, así como lo atinente a las resultas del llamamiento en garantía.

3. COSTAS

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, y en atención a que la sentencia materia del recurso de alzada y del grado jurisdiccional de consulta se revocó de manera parcial y no total, no se impondrán costas en esta instancia. Las de primera estarán a cargo únicamente de la AFP COLFONDOS S.A. y de la llamada en garantía MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. de manera proporcional y a favor de la parte demandante, al ser vencidas en juicio.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Quinta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR parcialmente los ordinales PRIMERO y SEGUNDO de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el 05 de mayo de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ, en contra de la sociedad AFP COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., el cual para todos los efectos quedará así:

PRIMERO: DECLARAR que al señor WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ le asiste el derecho a recibir la pensión de invalidez a cargo de AFP COLFONDOS S.A.,

a partir del 11 de octubre de 2013 en cuantía inicial de un salario mínimo legal mensual vigente y por trece (13) mesadas año, de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa.

SEGUNDO: *CONDENAR a la sociedad AFP COLFONDOS S.A. a reconocer y pagar al demandante y una vez reciba el Bono Pensional tipo A por parte de COLPENSIONES E.I.C.E., un retroactivo equivalente a ochenta y seis millones doscientos sesenta y dos mil ochocientos cincuenta y cuatro pesos (\$86'262.854), que comprende las mesadas pensionales causadas entre el 11 de octubre de 2013 y el 31 de mayo de 2022. El retroactivo deberá ser indexado, de conformidad con los parámetros establecidos en la parte motiva de esta sentencia. A partir del mes de junio de la presente anualidad, la AFP COLFONDOS S.A. le continuará pagando al demandante la suma de \$1'000.000 como salario mínimo, sin perjuicio de los reajustes que a futuro autoriza la Ley.*

Parágrafo único: *Autorizar a la AFP COLFONDOS S.A. a realizar los respectivos descuentos con destino al SGSSS.*

SEGUNDO: *REVOCAR los ordinales TERCERO, CUARTO y QUINTO de la sentencia proferida por el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito de Medellín, el 05 de mayo de 2022, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL promovido por WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ, en contra de la sociedad AFP COLFONDOS S.A. y COLPENSIONES E.I.C.E., los cuales para todos los efectos quedarán así:*

TERCERO: *ORDENAR a la demandada COLPENSIONES E.I.C.E. a trasladar, dentro de los treinta (30) días siguientes a la ejecutoria de esta sentencia, a la AFP COLFONDOS S.A., los aportes que haya efectuado el demandante señor WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ a través del Bono Pensional Tipo A en la modalidad que corresponda de acuerdo con el Decreto 1299 de 1994 y demás normas concordantes, absolviéndola de las demás pretensiones incoadas en su contra, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente proveído.*

CUARTO: *DECLARAR probados los hechos sustento de las excepciones de mérito de inexistencia de la obligación de pagar pensión de invalidez e inexistencia de la obligación de pagar intereses de mora del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 propuestas por COLPENSIONES E.I.C.E. y no probadas las excepciones propuestas por AFP COLFONDOS S.A. y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.*

QUINTO: *CONDENAR a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS SA a cubrir la suma adicional, si la hubiere, que agregada a la acumulada en la cuenta de ahorro individual*

por aportes obligatorios, más los rendimientos y bonos pensionales que llegaren a existir a favor de WILLIAM EDUARDO JARAMILLO RAMÍREZ, completen el capital necesario para pagar la pensión de invalidez que hoy se ordena.


TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia objeto de alzada.

CUARTO: Sin costas en esta instancia. Las de primera estarán a cargo únicamente de la AFP COLFONDOS S.A. y de la llamada en garantía MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. de manera proporcional y a favor de la parte demandante, al ser vencidas en juicio.


Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, acogiendo el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la reciente providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente


CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado


SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE
Magistrada

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Medellín.


RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario